

Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)

En este número:

NOTICIAS COMENTADAS:

1. En venta el 30 % de la empresa petrolera "Andina"
2. Controversia en torno a destino de dineros de la capitalización
3. Preocupación por repetidas "tomas" de instalaciones petroleras
4. Empresarios piden la cabeza de ministros McLean y Fortún

TEMA DE ANÁLISIS: El conflicto nacional se concentra en el Trópico cochabambino

MISCELÁNEA

NOTICIAS COMENTADAS

1. EN VENTA ACCIONES DE CAPITALIZADORA DE PETROLERA "ANDINA"

LOS HECHOS. Pluspetrol y Pérez Companc esperan vender en este mes, por 450 millones de dólares, el 30 % sus acciones en la capitalizada empresa "Andina". Entre los interesados se encuentran ExxonMobli, Shell, British Petroleum, Total, Pan American y Petrobras. Esto supone una revalorización en un 500 por ciento, ya que en 1997 se "capitalizó" (privatizó) la mitad de la empresa en 246,77 millones, valor que ahora asciende a 1.500 millones de dólares.

COMENTARIO. ¿A qué se debe esa milagrosa valorización? Evidentemente al "descubrimiento" de los campos gasíferos de San Alberto y San Antonio, campos que ya habían sido descubiertos por YPFB a un costo de 40 millones, pero que no habían sido contabilizados en el valor de la empresa a la hora de la capitalización. Por tanto nos encontramos con que una de las empresas capitalizadas (Andina) vale ahora más que todas las empresas capitalizadas en 1997, al mismo tiempo que los informes oficiales sobre sus ingresos son ridículos. Y mientras el valor de mercado de las acciones de las capitalizadas de Andina se han quintuplicado, el valor de las acciones "bolivianas", ahora de las AFPs, se rige por el valor de los libros..

2. CONTROVERSIA EN TORNO A DESTINO DE DINEROS DE LA CAPITALIZACIÓN

LOS HECHOS. Mientras el expresidente Sánchez de Lozada insiste en que los 1.671 millones de dólares aparentemente generados por el proceso de capitalización (y pertenecientes a "los bolivianos") sirvan para hacer efectivo el pago del "Bonosol", y el Gobierno se aferra al criterio de emplearlos para el pago del "Bolivia", la Confederación de Empresarios Privados propone que --sin desdeñar el Bolivida-- se dedique ese dinero fundamentalmente a la construcción y reconstrucción de caminos de vertebración del país, tarea que se estima requiere una inversión de 2.500 millones de dólares y que evidentemente potenciaría la capacidad productiva del país.

COMENTARIO. Lamentablemente la discusión se limita a cómo liquidar el patrimonio que teórica y legalmente corresponde al país (o al conjunto de sus habitantes), patrimonio que de hecho ya ha sido burdamente entregado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's), cuando en criterio de muchos analistas más preocupados por el país (es el caso de José Luis Roca), lo que corresponde hacer es constituir "un ente privado con capacidad jurídica para actuar como propietario de las acciones de los ciudadanos bolivianos" y no acabar con ellas liquidándolas de cualquier manera (sin negar que hay formas más "rentables" de liquidarlas, como la construcción de caminos, frente a formas más demagógicas y asistencialistas como los diversos "bonos"). Al margen de si la instancia adecuada es un "ente privado" u otra, lo que indudablemente debería ser tema de discusión inmediata en el país es la forma de recuperar ese capital para la propia población, pero además como verdadero "capital" productivo y no como insultante paliativo de la pobreza.

3. PREOCUPACIÓN POR REPETIDAS "TOMAS" DE INSTALACIONES PETROLERAS

LOS HECHOS. En el último tiempo la población local ha intervenido diversos pozos petroleros: el 20 de septiembre varios pueblos indígenas de la Chiquitanía ocupan dos campamentos de "Gas Oriente Boliviano" (exigiendo la entrega del plan de desarrollo de la región). En la misma fecha campesinos del Norte de Santa Cruz intervienen los campos "Humberto Suárez", "Cusis" y "Patujusal", de la empresa Chaco (pidiendo que la Prefectura y el INRA cumplan compromisos). El 22 de septiembre pobladores de Caraparí (Tarija) cortan el ingreso al Bloque San Alberto, de Petrobras (exigiendo la instalación de plantas petroquímica y termoeléctrica). Y el 23 de septiembre pobladores de Villa Fernández, en Monteagudo (Chuquisaca) toman un pozo petrolero de la Maxus (pidiendo posta sanitaria e instalación de agua potable y energía eléctrica).

COMENTARIO. Se trata de hechos con consecuencias graves (Petrobras amenazó con suspender operaciones, mientras Chaco y Gas Oriente evacuaron a su personal) que acaban de mostrar que el país casi vive en estado de convulsión. Si se analiza las razones, son las mismas que han producido el conflicto nacional: las necesidades desatendidas de la población rural. Tanto las prefecturas y otras instituciones (p. ej. el INRA), como las propias compañías petroleras parecen convencidas de que a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas en general se las puede engañar impunemente con promesas incumplidas. Pero poco a poco se va demostrando que no es así. Además aparece que en la conciencia difusa de la población las instalaciones petroleras siguen siendo un patrimonio social. Un dato a tener en cuenta.

4. EMPRESARIOS PIDEN LA CABEZA DE MINISTROS McLEAN Y FORTÚN

LOS HECHOS. Los empresarios agropecuarios de Santa Cruz pidieron amnistía financiera porque ya no pueden pagar sus deudas, a la vez que piden la destitución de los ministros de Gobierno y de Hacienda por "ineficientes" (refiriéndose básicamente al manejo del último conflicto nacional). Hablan de "amnistía financiera", una figura que en realidad no existe, y advierten con quiebras empresariales. Por su parte el Gobierno anuncia un decreto que permitirá a la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO) otorgar un crédito de 75 millones de dólares para los bancos del país.

COMENTARIO. La visión tanto de los empresarios como del gobierno parece muy inmedatista. El problema de fondo no está en la liquidez de la banca (la tiene en exceso), ni siquiera en la mora en sí misma (que según Asoban ya supera el 10 %), sino en la contracción del conjunto de la economía nacional como efecto del modelo neo-liberal (que ha supuesto la entrega de nuestra economía a instancias ajenas al país y a sus intereses). De ahí viene la mora intolerable no sólo de los empresarios sino de miles de pequeños prestatarios que se han declarado en emergencia (en los últimos días cuatro de ellos se han suicidado). Por tanto, mientras no se aplique reformas al modelo mismo --y nadie las quiere aplicar-- nuevos créditos de Nafibo serán sólo parches, que a corto plazo pueden parecer soluciones pero a la larga irán a incrementar la mora y no a disminuirla. Tampoco serviría de nada que se cambie a ministros para que administren el mismo modelo que ya se ha vuelto inmanejable.

Tema de análisis: EL CONFLICTO NACIONAL SE CONCENTRA EN EL TRÓPICO COCHABAMBINO

Balance de los últimos hechos (ver Bolivia Press N° 13 y Bolivia Press extraordinario)

El conflicto que duró más de tres semanas, y que todavía no ha concluido, costó en lo que podemos llamar su primera fase un total de 10 muertos y 127 heridos. (Según *Opinión*, 28-09 la actual gestión de gobierno ya tiene en su haber 28 muertos. Según *Última Hora* 28-09, los muertos suman 50.)

En términos de consecuencias económicas, la prensa habla de 80 % de industrias que hubieron de suspender actividades, de 12.000 fabriles que se quedaron sin trabajo, de que los daños producidos en el sistema vial (que estuvo bloqueado en un setenta por ciento) ascienden a 60 millones de dólares, de otros 200 millones de pérdidas sufridas por los diferentes sectores empresariales, y de 140 millones que habría perdido el gobierno.

La escasez de productos agrícolas en las ciudades llegó a ser alarmante, y tuvo además consecuencias especulativas. El *punte aéreo* que se tendió sobre las ciudades del eje central en los hechos sólo llegó a paliar la situación de los sectores acomodados.

Al final, después de arduas negociaciones y consultas a las respectivas bases de los sectores movilizados, y en gran medida gracias a la perseverancia y flexibilidad de las tres instancias mediadoras (Iglesia Católica, Defensora del Pueblo y Asamblea de Derechos Humanos), se logró acuerdos entre el Gobierno y dos de los sectores sociales: el Magisterio y la Confederación Única de Campesinos (CSUTCB). El Magisterio --evidentemente agotado por la larga movilización-- acabó aceptando la oferta ministerial del doble bono (Bs. 1.200.- al aprobar exámenes de calificación, y Bs. 300.- al concluir los 200 días lectivos), comprometiendo a su vez el Ministro la vigencia del Reglamento del Escalafón y el respeto al Fuero Sindical. Con este acuerdo las escuelas del país (con excepción del Chapare) han vuelto a funcionar normalmente y se supone que deberán cumplir esos 200 días lectivos, lo que para muchas de ellas significará terminar el curso a mediados de diciembre).

La negociación con la **CSUTCB** y otros sectores (sostenida en las oficinas de Caritas en La Paz, y que tuvo como protagonistas centrales al ministro Guiteras y al dirigente campesino "Mallku" Felipe Quispe) fue mucho más espectacular y tuvo varios días al país en vilo. Los principales acuerdos a que se llegó fueron los siguientes:

- ❑ Sustitución de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria ("Ley INRA")
- ❑ Asignación de 3,8 millones de hectáreas para programas de asentamientos humanos
- ❑ Archivo definitivo de los proyectos de Ley de Aguas y de Ley de Exportación de Aguas
- ❑ Modificación de las leyes Forestal y de Medio Ambiente y de los Códigos Civil y de Minería
- ❑ Elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Rural
- ❑ No erradicación de coca en las zonas tradicionales de los Yungas de La Paz

Además los **Gremialistas** lograron el compromiso de que se mantenga vigente el Régimen Tributario Simplificado, más las modificaciones de las leyes de Aduanas y de Municipalidades; y los **Transportistas** obtuvieron el compromiso de institucionalización del Servicio de Caminos.

Por su lado, en negociación aparte, la Coordinadora del Agua de Cochabamba ya había llegado a un acuerdo cuyo contenido más importante es el compromiso del Gobierno de reglamentar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado (sin embargo la Coordinadora se negó a levantar las medidas de presión hasta que no hubiera una resolución global del conflicto).

La mayor parte de estos compromisos (y de otros de menor importancia) tienen plazos concretos, y Felipe Quispe ha dejado claro que si éstos no se cumplen, los bloqueos volverán. Bajo estas premisas el lunes 9 de octubre los caminos empezaron a abrirse y se podría decir que el país en su conjunto está volviendo a la normalidad, si no fuera porque sigue sin resolver nada menos que el conflicto del Chapare.

El problema insoluble del "khatu" de coca

Los productores de coca del Chapare lograron a su vez acuerdos con el Gobierno en 13 de los 14 puntos que planteaban, entre ellos la anulación del plan de construcción de **tres nuevos cuarteles** en el Trópico de Cochabamba. Pero quedó sin resolver la demanda de que cada familia pueda seguir cultivando un "khatu" de coca (1.600 metros cuadrados). El dirigente Evo Morales llegó a plantear la posibilidad de que fuera medio khatu, pero las bases de las seis federaciones rechazaron esta propuesta (que por lo demás era terminantemente rechazada por el ministro de Gobierno), y decidieron seguir movilizadas. Tanto el Magisterio como la CSUTCB (junto a Gremialistas y Transportistas) prefirieron negociar al margen de lo que ocurriera con los coccaleros, con lo que éstos aparecen en una difícil situación de aislamiento, pese a lo cual la carretera troncal del país sigue cortada, y eso no permite hablar en absoluto de "normalidad".

Los dirigentes coccaleros sostienen que sin esa mínima producción de coca su vida es imposible y que prefieren "morir de bala que morir de hambre". Y el ministro de Gobierno sostiene que ése es un tema que ni siquiera puede entrar en negociación, a la vez que anuncia el desbloqueo forzado (vale decir armado) de la carretera Chimoré-Yapacaní. Por su parte el equipo de mediadores o facilitadores sigue haciendo llamados al diálogo. Se mantiene por tanto una tensa incertidumbre.

Un intento de análisis

De lo que nadie duda es de que este largo y duro conflicto ha desvelado las contradicciones mismas del sistema, más allá de la (tal vez discutible) inhabilidad del Gobierno para manejarlo. Los empresarios privados hablan de "*descomposición política, económica y social*" y de "*problemas estructurales de la sociedad que no merecieron atención oportuna y equitativa*". Industriales y productores agropecuarios se declaran en emer-

gencia y exigen medidas urgentes para recuperar todo lo que el país ha perdido, primero con la recesión que no se quiso reconocer y últimamente con el conflicto (medidas que van desde el no cobro de impuestos hasta la reprogramación de deudas, medidas ambas que no parecen estar al alcance ni del Gobierno ni de la Banca, que también atraviesa graves problemas por el incremento de la mora).

Diversos analistas y medios de prensa hablan de las "dos Bolivias" que coexisten y se desconocen, y ahora empiezan a enfrentarse, plantean la necesidad de un "viraje gubernamental" y diagnostican que en los últimos acontecimientos "los políticos son los grandes derrotados", de que "los partidos ya no representan a la sociedad", que nos encontramos gobernados por una "mafia ciega cuyo objeto de sobrevivencia es el lucro" y a nadie se le oculta que el Parlamento no fue capaz de jugar rol alguno en el conflicto (como no fuera el de subrayar las posiciones consabidas del Poder Ejecutivo, que apuntaba a un juego inteligente de respuestas sectoriales).

En cuanto al movimiento popular, ha demostrado por una parte que está recuperando fuerza, que los niveles intolerables de pobreza le están haciendo perder el miedo, que cada vez cree menos en los niveles de "representación democrática formal" y que poco a poco quiere nuevamente asumir su responsabilidad en la marcha del país. Pero también ha demostrado por otra parte que carece de una unidad que sería fundamental. Los cocaleros no sólo se han quedado solos por distancia geográfica con el Altiplano o porque su problema sea demasiado particular o específico (a fin de cuentas, como ha dicho Evo Morales, son ellos los que están defendiendo lo poco que queda de soberanía nacional); los cocaleros han quedado solos porque el Gobierno ha sabido utilizar muy bien las desavenencias entre dirigentes. Y esta división, que es muy grave, se suma a la falta --todavía-- de banderas aglutinantes que (como ya decíamos en el Boletín N° 13) permitan la estructuración de una dirección conjunta de todo el movimiento popular.

En medio de algunas voces de intelectuales, periodistas y fundaciones que defienden a capa y espada el modelo económico, han empezado a surgir voces autorizadas que - antes de exigir "cambios políticos" como salida a la crisis - plantean la "reversión" del proceso de la capitalización y el enjuiciamiento de sus autores. Algunas instancias sociales, como el "Movimiento Cultural Qullana" y la "Coordinadora del Agua y de la Vida" han empezado a plantear la necesidad de una Asamblea Constituyente como único escenario que puede servir para plantear soluciones de fondo a los problemas estructurales del país (propuesta incipiente que de momento ha sido mal recibida por algunos voceros gubernamentales e intelectuales).

Por otra parte se han levantado en la sociedad civil voces discordantes que, sin darle necesariamente la razón al Gobierno y sin entrar a discutir las causas estructurales de la crisis ni la descomposición del sistema, se limitan a plantear que quieren vivir en paz, sin bloqueos y sin movilizaciones. Son los que lamentan el deterioro de la imagen del país, el ahuyentamiento de potenciales inversores (¿dónde estarán esos inversores, que nunca aparecen?) y sobre todo el hecho de que las poblaciones originarias del país se inmiscuyan en asuntos que sólo debieran competir a las castas dirigentes. Ahí se sitúan la campaña "Basta ya" de los llamados "Ciudadanos por la Paz y la Democracia", ahí los empresarios privados de Santa Cruz que pedían estado de sitio, y también la agrupación de 200 paramilitares cruceños que estaban dispuestos a seguir el llamamiento de su Comité Cívico y de Carlos Valverde Barbary, y salir a la carretera troncal a matar bloqueadores.

En cuanto al problema del Chapare, no hay solución a la vista. Porque por un lado están 40.000 familias que no tienen otra perspectiva de sobrevivencia que un mínimo cultivo de coca (el "desarrollo alternativo" es una quimera, y la emigración a otros países no parece viable, al menos en esas proporciones). Pero por otro lado está la firme determinación de quienes mandan de hecho en el país --la Embajada USA y la DEA-- que no están dispuestos a permitir un solo hueco en la consigna propagandística de "coca cero", parte de una "guerra perdida" (ver resultados de una última reunión de policías en México) que afecta a todo el continente y especialmente a Colombia y Bolivia .

Al parecer nos encontramos al borde de un enfrentamiento con sangre, en el que como siempre perderán los pobres. Al momento del cierre de esta edición se tiene información de que estarían movilizadas las tropas de tres Divisiones con 5000 efectivos, mientras los campesinos cocaleros de base, incluso sobrepasando a sus dirigentes, mantienen los bloqueos y desafían al gobierno de seguir plantando la coca, "mientras continúa la demanda y su precio les significa un ingreso mayor a cualquier cultivo del llamado "desarrollo alternativo". Ni el gobierno ni los cocaleros aceptan una TREGUA propuesta por la Comisión Mediadora.

MISCELÁNEA

- Los 20 militares que vulneraron la ley y los derechos humanos en la Guerra del Agua serán juzgados por la justicia ordinaria, según conclusiones de las diligencias policiales que han sido remitidas al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal.
- Matones a sueldo agredieron a campesinos que se agrupan bajo el nombre de "Los Sin Tierra" en la provincia de Gran Chaco (Tarija). Según los agredidos los matones actuaron con la complicidad de la Policía y de la Subprefectura de Yacuiba.
- Ambientalistas de Cochabamba denuncian que existe un complot para acabar con el Parque Nacional Tunari, complot que por una parte podría explicar los repetidos incendios habidos los últimos días en el Parque y en el que por otra parte estarían implicados, en torno a negociantes loteadores, algunas autoridades municipales del Cercado, Sacaba y Tiquipaya, algunos supuestos dirigentes campesinos vinculados a los loteadores e incluso el diputado Asterio Camacho.
- Según informe ministerial presentado en la Cámara de Diputados, la corrupción en el ex FONVIS (Fondo de Vivienda Social) alcanzó sumas exorbitantes (todavía no determinadas, en todo caso más de 180 millones de dólares) e involucra tanto a familias de círculos gobernantes (como las familias Banzer y Sandóval Morón) como a dirigentes de la COB.
- El Rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz) destituyó al director del Museo Noel Kempff, Mario Suárez Riglos, al no haber aclarado las denuncias de "biopiratería" que involucran también a tres empresas petroleras. Estas acusaciones son parte del escándalo promovido por la entrega de 30 millones de dólares a cuatro ONGs "conservacionistas" para paliar los daños ambientales causados por el gasoducto a Cuiabá en el Boque Seco Chiquitano
- Un punto en el Acuerdo firmado entre gobierno y campesinos resulta de particular importancia para los productores y consumidores del país: "Gobierno se compromete a suspender los experimentos de campo en la producción de alimentos transgénicos en tanto no se establezca una reglamentación consensuada". Con este compromiso se abren mayores espacios para poner freno a las actuales y futuras aprobaciones de la experimentación con papa, soya, algodón y otros cultivos transgénicos.

**Sin que haya concluido todavía la temporada más dramática del año,
y haciendo votos por que no corra más sangre en nuestros caminos,
saludamos cordialmente a nuestros suscriptores
y agradecemos sus numerosas reacciones
a nuestros últimos boletines.**